

Santiago, veintiocho de junio de dos mil veinticuatro.

**Vistos:**

Por sentencia de cinco de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT O-5619-2022, se resolvió acoger la excepción de finiquito y rechazar la demanda en todas sus partes, sin costas.

Contra este fallo, la parte demandante interpone recurso de nulidad invocando la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, por estimar que se ha dictado sentencia con infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación con los artículos 159 N°5, 177 y 184 del mismo cuerpo legal; y los artículos 1560, 1561, 1563, 1564, 1566, 1681, 1682, 2446 y 2462 del Código Civil. En subsidio, invoca como segunda causal aquella del artículo 478 letra B) del Código del Trabajo, esto es, por estimar que se ha dictado sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. En subsidio, como tercera causal, invoca aquella del artículo 478 letra E) del Código del Trabajo, por estimar que se ha dictado sentencia con omisión de los requisitos señalados en el artículo 459 N°4 y 6 del mismo cuerpo legal. En subsidio, invoca como cuarta causal aquella contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, por estimar que se ha dictado sentencia con infracción sustancial de derechos o garantías constitucionales, en relación con el debido proceso. En subsidio, como quinta y última causal, invoca aquella del artículo 478 letra C) del Código del Trabajo, por estimar que es necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los abogados de las partes.

**Considerando:**

**Primero:** Que, la demandante invoca primero la causal contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo, toda vez que, a su juicio, no es correcto el poder liberatorio que la sentenciadora otorga al finiquito firmado por las partes, por ir este documento en contra de norma expresa que prohíbe su contenido en relación con el tipo de contrato de trabajo que regía la relación laboral, esto es, por obra o faena.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SXXQXXTPML

Argumenta que el referido documento infringe el artículo 1681 por adolecer de objeto y causa ilícita, pues pone término al contrato por el vencimiento de un plazo, cuando la relación laboral fue pactada por obra o faena, la que además estaba aún vigente por mandato expreso de autoridad, según concluyó la Contraloría General de la República en proceso 944/20 de 1 de septiembre de 2021, ordenando la reincorporación del actor a sus funciones y el pago de las remuneraciones devengadas en el periodo que permaneció separado de su cargo.

Alega que es abiertamente errada la conclusión indicada en el considerando quinto del fallo, en cuanto a que el finiquito fue puesto en conocimiento del trabajador el 4 de mayo de 2021, sin perjuicio de que en realidad fue firmado el día 10 de agosto del mismo año, sin que haya antecedentes que permitan arribar a esa conclusión.

Plantea que la sentencia, al dar valor a un finiquito en el que se reconoce estar referido a un contrato de obra o faena cuya vigencia es determinada por un Decreto que incluso la prolonga más allá de su fecha, infringe el artículo 177 del Código del Trabajo y los artículos 1681 y 1682 del código Civil, ya que la nulidad del finiquito es manifiesta, pues fue otorgado en fraude a la ley; y así es una hipótesis de causa ilícita y objeto ilícito, sólo tiene la apariencia de legalidad, en lo concreto va contra la ley, por cuanto es la propia ley la que indica que el contrato de obra se mantiene vigente hasta que la obra concluya. El finiquito celebrado en estas condiciones es nulo de nulidad absoluta, con arreglo al artículo 10 del Código Civil, en relación con los artículos 1445 N°3, 1462, 1466 parte final del mismo cuerpo legal, pues se ha ejecutado un acto con vicio de objeto ilícito, cuya sanción es la nulidad absoluta conforme a los artículos 1681, 1682 y 1683 todos del Código Civil. Agrega que este vicio es reconocido y ratificado por la propia Contraloría General de la Republica al ordenar la reincorporación del trabajador y el pago de sus prestaciones laborales, ya que su contrato de obra permanencia vigente al momento de la separación, cuestión que no menciona el finiquito de manera alguna esta circunstancia y, por el contrario, indica como causal una mentira: que a la fecha del finiquito y del despido la obra habría concluido.



También señala que de acuerdo al artículo 2446 del Código Civil, tal mención requirió de la necesaria especificidad no sólo en atención a la naturaleza de los bienes jurídicos en juego, sino por el carácter transaccional del aludido instrumento. Desde esta perspectiva, si la redacción del finiquito estuvo a cargo del propio empleador y éste quería incluir dentro de la transacción las acciones provenientes de remuneraciones pendientes y devengadas en los meses en que el trabajador se encontró separado de sus funciones de manera ilegal y las devengadas mientras el estado de alerta sanitaria permaneciera vigente, debió incluirlas expresamente en el documento, lo que no hizo, de modo que su inobservancia debe también ser sancionada. Arguye que al no constar contraprestación de parte del empleador a cambio de una supuesta renuncia de acción de cobro de prestaciones de remuneraciones en favor del trabajador, la transacción la transformaría en una mera renuncia de un derecho no disputado. Alude que del mismo modo se infringe el artículo 2462 del Código Civil, pues este impone la exigencia de definir el objeto específico de la transacción. Por consiguiente, si el finiquito suscrito por el trabajador no hace mención expresa a remuneraciones devengadas después de separado de sus funciones, encontrándose vigente la Alerta Sanitaria, (obra o faena), no puede considerarse eficaz una mera referencia general de acciones y derechos.

Continúa argumentando que, no habiéndose precisado nada por las partes en orden a que la renuncia de acciones consignada en el finiquito también comprendía las remuneraciones a que tiene derecho el trabajador contratado por obra o faena mientras estas permanecen vigentes, no incluido expresamente en él la renuncia genérica y bajo un formato tipo, contenida en dicho documento, sólo es posible entenderla referida a los conceptos y montos pagados por el empleador y su fecha de firma. Esto resulta coherente con la naturaleza jurídica del finiquito, en cuanto se trata de una transacción sobre derechos laborales de orden público, donde lo que se busca es evitar o eludir un pleito, lo que permite exigir la mayor precisión de lo acordado, debiendo abordarse expresamente las materias, derechos, indemnizaciones u otros aspectos



acordados, para así permitir el cumplimiento efectivo de la convención y la evasión de los derechos laborales.

Agrega que no existe en el finiquito ningún elemento que permita entender que el actor tuvo la intención de renunciar a las remuneraciones de las que fue privado de manera ilegal, sino que del análisis de las partidas que se consignan en este podemos concluir que, a lo sumo, este finiquito tuvo la intención de darle un carácter exclusivamente de cumplimiento formal y de corrección al desorden que el empleador mantenía con sus dependientes contratados en este estado de Alerta Sanitaria, cuestión que fue reconocida por la testigo que depuso en estrados, quien a la fecha, resulta ser dependiente del mismo empleador. Afirma que lo anterior es confirmado por el artículo 1561 del Código Civil, que señala que por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado. Otro tanto ocurre con el artículo 1563, que establece que en aquellos casos en que no apareciere voluntad en contraria deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Que por otro lado el sentenciador también quebrantó el artículo 1564 inciso 1° del Código Civil, el cual establece que las cláusulas de un contrato se interpretaran unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Por último, considera que se ha infringido en el fallo recurrido el artículo 1566 inciso 2° del Código Civil, en cuanto dispone que las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretaran contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de una falta de explicación que haya debido darse por ella.

Afirma que cuanto denuncia ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo por cuanto de no haberse cometido la infracciones de ley denunciadas no se habría acogido la excepción de finiquito opuesta por la demandada, en atención a que el finiquito suscrito entre las partes no produce efecto liberador para el empleador respecto al pago de las remuneraciones devengadas desde el mes de noviembre de 2020, fecha en que fue separado de sus funciones, y hasta la fecha en que la obra o servicio para la que fue contratado permanecían vigentes, dado que este



instrumento no contiene mención alguna de renuncia al cobro de esas remuneraciones, acción ejercida en estos autos.

Solicita, en concreto, que se anule el fallo impugnado y se dicte sentencia de reemplazo que acoja la demanda en todas sus partes, con costas.

**Segundo:** Que, en subsidio, la demandada invoca como causal de nulidad aquella del artículo 478 letra B) del Código del Trabajo, toda vez que, a su juicio, en los considerandos séptimo a décimo primero se vulneran los principios lógicos de no contradicción y razón suficiente, en cuanto en ellos se indica que incumbe a la demandante la acreditación de los hechos sobre la continuidad laboral, y con ello el carácter indefinido del contrato, así como las causales de objeto ilícito y demás vicios del consentimiento que afectan al finiquito de autos, lo cual en concepto del sentenciador no se logró demostrar en la especie. Luego, erradamente acoge la excepción de finiquito. Afirma que la correcta fundamentación y conclusión es que debía acogerse la nulidad del finiquito de autos y acoger la demanda de cobro de prestaciones, por cuanto si la demandada no logró probar la veracidad y justificación de los hechos y causales de despido que invocó en el finiquito, justamente procedía que se acogiera la nulidad del finiquito.

Agrega que por una parte el sentenciador reconoce lo decretado por la Contraloría General de la República en orden a establecer que el contrato de trabajo del actor es de obra o faena, y que esta corresponde a la vigencia del estado de Alerta Sanitaria por COVID-19, pero por otro lado determina que el contrato pudo concluir por la causal del N°5 del Artículo 159 del Código del Trabajo.

Afirma que cuanto denuncia influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo porque de haberse apreciado la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, debió declararse nulo el finiquito y dar lugar a las pretensiones del actor.

Solicita, en concreto, que se anule el fallo impugnado y se dicte sentencia de reemplazo que acoja la demanda en todas sus partes.

**Tercero:** Que, en subsidio, la demandada invoca como causal de nulidad aquella del artículo 478 letra E) del Código del Trabajo, toda vez que, a su juicio, en los mismos considerandos citados para la causal



anterior se comete el vicio invocado, porque el correcto análisis del material probatorio rendido determina que la demandada no acreditó estar eximida del pago de las prestaciones reclamadas en la demanda, consistente en la remuneraciones del trabajador de la que fue privado arbitrariamente con la separación, los hechos y causales de esta que se invocaron en la carta de aviso, y del propio finiquito es fácil advertir que, por un lado el despido del actor carece de justificación, y por otro las remuneraciones demandas en el proceso no han sido materia del finiquito. Alega que el fallo se limita a rechazar la nulidad de finiquito y el cobro de las prestaciones sin sentido y un real y correcto análisis del material probatorio rendido, los hechos que deben estimarse probados y los razonamientos que conducen a esa estimación.

También alega que se dicta sentencia sin dar cumplimiento a los requisitos del N°6 del artículo 459 del Código del Trabajo, concretamente por haberse omitido la resolución de pago de las remuneraciones reclamadas, a pesar de que fue una cuestión sometida a su conocimiento.

Afirma que cuanto denuncia influye sustancialmente en lo dispositivo de fallo por cuanto de no haberse incurrido en los vicios alegados se debió acoger la demanda.

Solicita, en concreto, que se anule el fallo impugnado y se dicte sentencia de reemplazo que acoja la demanda en todas sus partes.

**Cuarto:** Que, en subsidio, la demandada invoca como causal de nulidad aquella del artículo 477 del Código del Trabajo, toda vez que, a su juicio, la sentenciadora ha vulnerado la garantía del debido proceso, por estimar que el fallo no analiza la prueba rendida ni fundamenta su decisión, especificando que el vicio se concreta en los mismos considerandos ya citados para las causales anteriores.

Afirma que lo denunciado influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo porque de no haberse incurrido en el vicio aludido, necesariamente debió rechazarse la excepción de finiquito.

Solicita, en concreto, que se anule el fallo impugnado y se dicte sentencia de reemplazo que acoja la demanda en todas sus partes.

**Quinto:** Que, en subsidio, la demandada invoca como causal de nulidad aquella del artículo 478 letra C) del Código del Trabajo, toda vez



que, a su juicio, en el fallo se produce este vicio en el considerando séptimo a décimo primero, por las mismas razones ya expuestas para todas las causales anteriores, las que pide tener por expresamente reproducidas.

Solicita, en concreto, que se anule el fallo impugnado y se dicte sentencia de reemplazo que acoja la demanda en todas sus partes.

**Sexto:** Que el recurso de nulidad laboral tiene por objeto, según sea la causal invocada, asegurar el respeto a las garantías y derechos fundamentales, o bien, conseguir sentencias ajustadas a la ley, como se desprende de los artículos 477 y 478 del Código del Trabajo, todo lo cual evidencia su carácter extraordinario que se manifiesta por la excepcionalidad de los presupuestos que configuran cada una de las referidas causales en atención al fin perseguido por ellas, situación que igualmente determina un ámbito restringido de revisión por parte de los tribunales superiores y que, como contrapartida, impone al recurrente la obligación de precisar con rigurosidad los fundamentos de aquellas que invoca, como, asimismo, de las peticiones que efectúa.

Igualmente, cabe tener presente que el recurso de nulidad no constituye una instancia, de manera que estos sentenciadores no pueden ni deben revisar los hechos que conforman el conflicto jurídico de que se trata, siendo la apreciación y establecimiento de éstos una facultad exclusiva y excluyente del juez que conoció del respectivo juicio, y, asimismo, a esta Corte le está vedado efectuar una valoración de la prueba rendida ante el Juzgado del Trabajo, lo que corresponde únicamente a éste, el cual está dotado de plena libertad para ello, con la sola limitación de no contrariar los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

El recurso de nulidad, finalmente, es un arbitrio de derecho estricto que requiere claridad y precisión en su fundamentación lo que resulta necesario toda vez que aquello da y define la competencia del Tribunal superior, el que no puede acogerlo por otros motivos, salvo la situación contemplada en el inciso final del artículo 479 del Código del Trabajo.

**Séptimo:** Que, en consecuencia, el recurso de nulidad es un arbitrio de carácter extraordinario y de derecho estricto y solo procede por



las causales que expresamente se prevé en los artículos 477 y 478 del Código del Trabajo.

**Octavo:** Que la causal que se esgrime en primer término es la de infracción de ley, la que tiene como finalidad velar por una correcta aplicación del derecho a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos tenidos por probados.

Dicha hipótesis resulta procedente en el evento que el fallo aplique incorrectamente el derecho llamado a regir la cuestión que motiva la controversia, lo que puede tener lugar en los casos de contravención formal de la ley -aquéllos en que la sentencia prescinde de la ley o falla en oposición a su texto expreso-; en los de errónea interpretación de la ley -cuando la sentencia da al precepto legal un sentido o alcance distinto a aquel que debió haberle dado si hubiera aplicado correctamente las normas de interpretación; y si existiere una falsa aplicación de la ley -defecto que puede producirse cuando la ley se aplica a un caso no regulado por la norma o la sentencia prescinde de la aplicación de la ley para los casos en que ella se ha dictado-, siempre que cualquiera de estas hipótesis que se presente influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

**Noveno:** Que, por lo mismo, esta causal, en su segunda hipótesis, supone la aceptación de los hechos establecidos en la sentencia, por lo que la fundamentación y sustento del recurso por este motivo debe ser coincidente con ese propósito.

Del mismo modo, no es factible en esta causal impugnar el raciocinio valorativo que ha efectuado la sentencia de los medios de prueba aportados en el juicio, desde que esta apreciación incide en la determinación de los hechos de la causa, lo que -como ya se dijo- es ajeno al objetivo de la infracción de ley, situación que se advierte de la atenta lectura del presente arbitrio de nulidad.

**Décimo:** Que, en efecto, el libelo sostiene como fundamento de la impugnación que el finiquito invocado es nulo, por las razones latamente expresadas en el motivo 1°, las que se oponen a los antecedentes de hecho, tanto los analizados como los establecidos en el fallo atacado,



conforme a los cuales no existe continuidad en la prestación de los servicios, desde que ella se vio interrumpida en agosto y los primeros días de septiembre; procediendo el actor a suscribir el finiquito ya aludido antes de la dictación de la resolución de la Contraloría General de la República que dispuso su reintegro en determinadas hipótesis, la que fue dejada sin efecto por la existencia del citado instrumento.

Estos presupuestos de lo decidido fueron establecidos por el tribunal después de consignar que la demandante omitió señalar la forma en que se habrían vulnerado las normas del Código del Trabajo que tienen el carácter de irrenunciables, lo que se estima relevante al encontrarse establecido que se ha interrumpido la relación contractual, por lo que no puede asumirse una contravención de magnitud para justificar la existencia del objeto ilícito alegado; y que tampoco rindió prueba suficiente para acreditar fuerza o error como vicio del consentimiento, y menos, si ella fue injusta o ilegítima, grave y determinante, desde que la aportada fue imprecisa y vaga para dichos fines; considerando que el lapso de tiempo transcurrido entre la fecha de término de los servicios y aquella en que la parte demandante fue a firmar el finiquito fue suficiente para el estudio y asesoría sobre su firma, de manera que la resolución de la Contraloría General de la República con fecha posterior a la firma del finiquito, por la cual se disponía la reincorporación del trabajador, en ciertos supuestos, fue dejada sin efecto en atención a la existencia del citado finiquito.

**Undécimo:** Que, en consecuencia, los fundamentos del capítulo que se revisa no pueden ser admitidos, al pugnar con los hechos asentados, por una parte, y suponer la concurrencia de otros no asentados por la insuficiencia de la prueba rendida, por lo que resulta forzoso concluir que no se ha demostrado la ocurrencia de los errores de derecho alegados, ni menos su influencia en lo dispositivo del fallo, lo que determina que éste sea desechado.

**Duodécimo:** Que, en forma subsidiaria, se ha alegado la concurrencia de la causal de invalidación prevista en el artículo 478 b) del Código del Trabajo, y para su resolución resulta necesario tener en cuenta que el artículo 456 del Código del Trabajo establece que: *“El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Al*



*hacerlo, el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.”*

Por ello, lo que corresponde es determinar si en su sentencia el tribunal ha vulnerado en forma manifiesta, esto es, de manera evidente y notoria las reglas indicadas en el artículo 456 ya citado.

**Décimo tercero:** Que, de acuerdo a lo expresado, nuestro sistema procesal ha entregado parámetros a los jueces del fondo para la valoración de la prueba rendida en la materia, imponiéndoles la obligación de respetar la coherencia y la razonabilidad que debe conducir tal proceso para resolver en un determinado sentido, los que Couture define como “las reglas del correcto entendimiento humano”.

En consecuencia, en el examen de fundamentación de las sentencias se exige que los tribunales asienten los hechos que sostienen lo decidido y expresen los medios que sustentan esas determinaciones fácticas, porque su motivación legitima la función jurisdiccional y da cabida a la interposición de los recursos legales para activar los mecanismos de control en la aplicación del derecho al caso concreto, de manera que la función del tribunal *ad quem* al conocer del recurso de nulidad por esta causal radica en la revisión del razonamiento que ha seguido el tribunal en el citado proceso.

**Décimo cuarto:** Que, para que esta Corte, en cuanto tribunal de nulidad, se encuentre en condiciones de efectuar un control sobre las reglas de la valoración de la prueba en la fundamentación de la sentencia, resulta indispensable que la parte recurrente precise al momento de formalizarlo, las reglas fundamentales de la lógica, de la ciencia y de la experiencia, que habrían sido incumplidas por el juez de la instancia, límites de ponderación que tradicionalmente se han entendido referidos a las leyes fundamentales de coherencia y derivación y a los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.



**Décimo quinto:** Que, en la especie, el recurso se sustenta en denunciar la infracción de la carga de la prueba y en denunciar que la única valoración razonable de los antecedentes invocados era la que su parte proponía, exposición de motivos dista de satisfacer el estándar de un recurso como el intentado, por la causal propuesta, desde que éste no constituye instancia, y tiene como objeto la cautela de la regularidad y razonabilidad del razonamiento judicial, mediante la imposición al tribunal de la carga de sujetarse a las directrices ya citadas en la labor de análisis probatorio que le es propio. En consecuencia, para la fundamentación de la impugnación por el motivo que se revisa no basta la reiteración de los fundamentos de su postura procesal, porque ellos no pueden ser valorados por esta Corte en sede de nulidad, ni tampoco la expresión de la disconformidad sobre el resultado al que se arribara por el tribunal si se ha omitido desarrollar la manera en que se han quebrantado los principios o directrices citados, lo que no se satisface con la vertida en el apartado que se revisa, apareciendo, por el contrario, que la carga de la prueba de los hechos alegados, atendidos sus términos, ha sido correctamente asignada en el proceso, motivo por el cual ese fundamento tampoco podrá ser admitido.

**Décimo sexto:** Que en estas condiciones, el recurso no podrá prosperar, por su defectuosa fundamentación, teniendo asimismo en consideración para concluirlo, que los razonamientos contenidos en la sentencia impugnada para resolver la acción deducida, independientemente si fueran compartidos o no por el recurrente, constituyen reflexiones idóneas que permiten entender conforme a los parámetros que la ley ordena considerar, la convicción de la jueza de la instancia, cuyas conclusiones no desbordan los márgenes consagrados en la normativa del ramo, especialmente las máximas de experiencia, la lógica y los principios científicamente afianzados.

**Décimo séptimo:** Que, por lo demás, para el análisis de esta causal, dado que se trata de un vicio formal, se exige que la infracción de las reglas de valoración de la prueba sea “manifiesta”, esto es, evidente, ostensible, indudable, lo que obviamente no se extiende al caso en que la ponderación de los medios de prueba no corresponde a la apreciación



particular que el interesado hace de los mismos, razones todas por las cuales el capítulo correspondiente será desestimado.

**Décimo octavo:** Que, en cuanto al tercer apartado del recurso, por el cual se reprocha a omisión de análisis de la prueba y de decisión sobre las prestaciones que indica, las que se refieren a períodos posteriores al finiquito suscrito, atendidos su términos, aparece que no podrá prosperar, atendido que los presuntos vicios carecen de influencia en lo dispositivo del fallo.

En efecto, como toda nulidad, este arbitrio responde al imperativo de la relevancia, en el sentido que no basta la verificación de un vicio para disponer la invalidación de un fallo, elemento que está expresado en el mismo artículo 478 del Código del Trabajo, al indicar que *“No producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo (...)”*; prescripción que se traduce en la exigencia de demostrar el efecto que ellos tendrían en la decisión, esto es, que su ocurrencia ha posibilitado la decisión de lo debatido en un sentido diverso del que – como se denuncia en este caso- la ponderación de la prueba omitida habría determinado, cuestión que no se produce en la especie, desde que las razones para desestimar la nulidad del finiquito imponen, por la forma de proposición de las pretensiones, el rechazo de los acápites que denuncia silenciados, cuestión que, por lo demás, no es efectiva, al aparecer ellas resueltas en la sentencia impugnada.

En consecuencia, el análisis de la prueba que denuncia soslayada, tampoco habría determinado una decisión diversa, al guardar relación con peticiones que están subordinadas a la intención anulatoria del finiquito que fuera descartada, situación que priva de sustento al motivo alegado por estos hechos.

**Décimo noveno:** Que, en subsidio de la propuesta precedente, se denuncia la configuración de la causal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, en su variante de infracción de garantías fundamentales, la que se habría verificado por la ausencia de fundamentos en lo decidido, omitiendo analizar medios de prueba incorporados por las partes.

**Vigésimo:** Que los agravios que se han denunciado en la especie están vinculados con la noción de debido proceso, la que se encuentra



integrada por un conjunto de garantías que la Constitución, los Tratados Internacionales ratificados por Chile y en vigencia y las leyes entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se pretende que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que se respeten los procedimientos fijados por la ley y que las sentencias sean debidamente fundadas.

**Vigésimo primero:** Que, sin perjuicio de lo dicho, el control que cabe realizar esta Corte, a propósito de un recurso de nulidad, ha sido acotado por el legislador, de manera que, de acuerdo con la formulación legal respectiva, se autoriza la correspondiente anulación únicamente si se está en presencia de una vulneración sustancial de los derechos o garantías fundamentales, teniendo para ello presente que los aspectos tutelados por el motivo que se invoca abordan dimensiones diversas de las ya previstas expresamente en la ley procesal, como ocurre con los motivos de invalidación previstos en el artículo 478 del Código del Trabajo, que miran precisamente a la forma de las sentencias, cautelando la relación del juez con el objeto de la litis, velando por el respeto a las formas de las sentencias, la resolución integral de los puntos propuestos, mediante una resolución fundada en los parámetros que la ley impone considerar.

**Vigésimo segundo:** Que, en consecuencia, no tienen la capacidad de configurar la causal que se propone, la denuncia de haber dirimido la litis sin fundamentos, omitiendo hacerse cargo de los medios de prueba ofrecidos y acompañados, por cuanto dicha descripción de hecho ha sido recogida en causales precisas y determinadas diferentes de la alegada en este caso, ya deducidas en autos y descartadas en los motivos que preceden, por lo que su renovación a título de esta hipótesis no puede ser admitida, lo que determina su desestimación.

**Vigésimo tercero:** Que, por último, tampoco puede prosperar la causal deducida en el punto VIII.- del recurso, sustentada en lo previsto en la letra c) del artículo 478 del Código del Trabajo, y cuyo fundamento se remite a lo consignado en los capítulos que preceden en el mismo libelo, porque semejante descripción desatiende el objetivo de la hipótesis propuesta, se aparta de su carácter de derecho estricto y da cuenta de



una abdicación del deber de fundarlo debidamente, estado de cosas que impone su rechazo.

**Vigésimo cuarto:** Que, en consecuencia, el recurso será desestimado totalmente, al no configurar ninguno de los hechos propuestos las causales de invalidación esgrimidas.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos, 477, 478 letras B), C) y E), 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, se **rechaza, con costas** el recurso de nulidad deducido por la parte demandante, en contra de la sentencia de cinco de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la causa RIT O-6519-2022, la que, en consecuencia, no es nula.

**Regístrese y comuníquese.**

**Redacción de la ministra Graciela Gómez Quiral.**

No firma la Fiscal Judicial señora Troncoso, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por encontrarse ausente.

**N° Laboral-Cobranza-2145-2023.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SXXQXXTPML

Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Graciela Gomez Q. y Ministro Suplente Sergio Guillermo Cordova A. Santiago, veintiocho de junio de dos mil veinticuatro. En Santiago, a veintiocho de junio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

